

# Segundo cuatrimestre del año 2000

---

Javier Medina Guijarro  
José Antonio Pajares Giménez

## 1. INTRODUCCIÓN

Siguiendo idéntica metodología a la del número anterior, ofrecemos en esta sección al lector interesado en ello una información de carácter general sobre la legislación y la jurisprudencia más relevante producida en el primer cuatrimestre del año, en relación con las materias que directa o indirectamente afectan a la actividad económico-financiera del sector público.

En la primera parte («Legislación») constan, sistemáticamente ordenadas, Leyes del Estado y Autonómicas, Decretos u Órdenes ministeriales y demás Resoluciones. La información que se proporciona consiste en el enunciado de la disposición y la referencia del periódico oficial donde aparece publicado para facilitar su consulta.

La segunda parte («Jurisprudencia») recoge las resoluciones dictadas por la Sala de Justicia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, por el Tribunal Supremo y el Constitucional, figurando, en las primeras, una breve descripción de su fundamentación jurídica.

En esta ocasión no se incluyen «Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas», por cuanto el *Boletín Oficial* correspondiente al período al que se refiere esta REVISTA no ha publicado ninguna.

## 2. LEGISLACIÓN

### 2.1. Leyes estatales

■ REFORMA del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. *BOE* nº 118, de 17 de mayo de 2000.

■ REFORMA del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.2. y 3. *BOE* nº 124, de 24 de mayo de 2000.

■ REFORMA del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.2 y el Título Noveno. *BOE* nº 145, de 17 de junio de 2000.

### 2.2. Reales Decretos Legislativos del Estado

■ REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. *BOE* nº 142, de 14 de junio de 2000.

■ REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. *BOE* nº 148, de 21 de junio de 2000.

■ REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia. *BOE* nº 154, de 28 de junio de 2000. CORRECCIÓN de errores del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia. *BOE* nº 162, de 7 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. *BOE* nº 154, de 28 de junio de 2000. RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes. *BOE* nº 162, de 7 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social. *BOE* nº 189, de 8 de agosto de 2000.

### 2.3. Reales Decretos-leyes del Estado

■ REAL DECRETO-LEY 2/2000, de 23 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, y otras normas tributarias. *BOE* nº 151, del 24 de junio de 2000. CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y otras normas tributarias. *BOE* nº 187, de 5 de agosto de 2000. RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto Ley 2/2000, de 23 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias y otras normas tributarias. *BOE* nº 162, de 7 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO-LEY 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa. *BOE* nº 151, de 24 de junio de 2000. CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto-ley 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa. *BOE* nº 181, de 29 de julio de 2000. RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa. *BOE* nº 162, de 7 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO-LEY 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. *BOE* nº 151, de 24 de junio de 2000. CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto-ley 4/200, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. *BOE* nº 154, de 28 de junio de 2000.

■ REAL DECRETO-LEY 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico público de racionalización del uso de los medicamentos. *BOE* nº 151, de 24 de junio de 2000. CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto-ley 5/200, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico público y de racionalización del uso de los medicamentos. *BOE* nº 154, de 28 de junio de 2000. RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico público y de racio-

nalización del uso de los medicamentos. *BOE* nº 162, de 7 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO-LEY 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. *BOE* nº 151, de 24 de junio de 2000. CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. *BOE* nº 154, de 28 de junio de 2000. RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. *BOE* nº 162, de 7 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO-LEY 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones. *BOE* nº 151, de 24 de junio de 2000. CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes en el sector de telecomunicaciones. *BOE* nº 154, de 28 de junio de 2000. RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones. *BOE* nº 162, de 7 de julio de 2000.

## 2.4. Leyes autonómicas

### 2.4.1. Comunidad Autónoma de Andalucía

■ CORRECCIÓN de errores de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. *BOE* nº 135, de 6 de junio de 2000.

### 2.4.2. Comunidad Autónoma de Asturias

■ LEY 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro. *BOE* nº 194, de 14 de agosto de 2000.

### 2.4.3. Comunidad Autónoma de Canarias

■ LEY 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias. *BOE* nº 194, de 14 de agosto de 2000.

#### 2.4.4. *Comunidad Autónoma de Cantabria*

■ LEY 1/2000, de 24 de mayo, de modificación de la Ley 5/1987, de 27 de marzo, de elecciones al Parlamento de Cantabria. *BOE* nº 159, de 4 de julio de 2000.

#### 2.4.5. *Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha*

■ LEY 2/2000, de 26 de mayo, por la que se modifica la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha. *BOE* nº 159, de 4 de julio de 2000.

■ LEY 4/2000, de 7 de junio, de modificación de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. *BOE* nº 202, de 23 de agosto.

#### 2.4.6. *Comunidad Autónoma de Cataluña*

■ LEY 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña. *BOE* nº 137, de 8 de junio de 2000.

■ LEY 3/2000, de 19 de mayo, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2000. *BOE* nº 137, de junio 2000.

■ LEY 4/2000, de 26 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas. *BOE* nº 147, de 20 de junio de 2000.

#### 2.4.7. *Comunidad Autónoma de Madrid*

■ LEY 6/2000, de 19 de mayo, por la que se modifica el artículo 199 bis de la Ley 27/1997, de 26 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad de Madrid, estableciendo, para personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, la exención del pago de tasa por derechos de examen para la selección del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.

■ LEY 7/2000, de 19 de junio, de rehabilitación de espacios urbanos degradados y de inmuebles que deban ser objeto de preservación. *BOE* nº 189, de 8 de agosto de 2000.

■ LEY 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso. *BOE* nº 189, de 8 de agosto de 2000.

#### 2.4.8. Comunidad Autónoma Valenciana

■ LEY 7/2000, de 29 de mayo, de Mutualidades de Previsión Social de la Comunidad Valenciana. *BOE* nº 148, de 21 de junio de 2000.

### 2.5. Reales Decretos

■ REAL DECRETO 469/2000, de 7 de abril, por el que se modifica la estructura orgánica básica del Consejo de Seguridad Nuclear. *BOE* nº 112, de 10 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 557/2000, de 27 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales. *BOE* nº 102, de 28 de abril de 2000. CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales. *BOE* nº 109, de 6 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 574/2000, de 5 de mayo, por el que se crean determinados órganos directivos en los Ministerios de Hacienda, de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y de Ciencia y Tecnología. *BOE* nº 109, de 6 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 683/2000, de 11 de mayo, por el que se modifica la estructura orgánica de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Hacienda, de Interior, de Fomento y de Economía. *BOE* nº 114, de 12 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 685/2000, de 12 de mayo, por el que se determina la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. *BOE* nº 115, de 13 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios. *BOE* nº 148, de 21 de junio de 2000.

■ REAL DECRETO 687/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores. *BOE* nº 115, de 13 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 688/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia. *BOE* nº 115, de 13 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 689/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Ministerios de Economía y de Hacienda. *BOE* nº 115, de 13 de mayo de 2000. CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 689/2000, de 12 de mayo, por el que se

establece la estructura orgánica básica de los Ministerios de Economía y de Hacienda. *BOE* nº 118, de 17 de mayo. CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 689/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Ministerios de Economía y de Hacienda. *BOE* nº 125, de 25 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 690/2000, de 2 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento. *BOE* nº 115, de 13 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 691/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. *BOE* nº 115, de 13 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 692/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. *BOE* nº 115, de 13 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 693/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. *BOE* nº 115, de 13 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 694/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas. *BOE* nº 115, de 13 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 695/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente. *BOE* nº 115, de 13 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 696/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. *BOE* nº 115, de 13 de mayo de 2000. CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 696/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. *BOE* nº 125, de 25 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 807/2000, de 19 de mayo de 2000, por el que se crea en el Ministerio del Interior la Dirección General de Extranjería e Inmigración. *BOE* nº 121, de 20 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 808/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia. *BOE* nº 121, de 20 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 809/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo. *BOE* nº 121, de 20 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 810/2000, de 19 de mayo, de modificación del Real Decreto 2615/1996, de 20 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto de Turismo de España. *BOE* nº 121, de 20 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 811/2000, de 19 de mayo, por el que se determina la estructura de apoyo al Ministro Portavoz del Gobierno. *BOE* nº 121, de 20 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 929/2000, de 26 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 838/1996, de 10 de mayo, que reestructura el Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. *BOE* nº 127, de 27 de mayo de 2000.

■ REAL DECRETO 992/2000, de 2 de junio, por el que se modifica el Estatuto del Organismo Autónomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. *BOE* nº 133, de 3 de junio de 2000.

■ REAL DECRETO 993/2000, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 696/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. *BOE* nº 133, de 3 de junio de 2000.

■ REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. *BOE* nº 147, de 20 de junio de 2000.

■ REAL DECRETO 996/2000, de 2 de junio, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y del plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y normas para la formulación de las cuentas de los grupos de entidades aseguradoras, aprobado por Real Decreto 2014/1997, de 26 de diciembre, para adaptarlos a la Directiva 98/78/CE, de 27 de octubre, relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros.

■ REAL DECRETO 1087/2000, de 8 de junio, por el que se modifica la estructura orgánica de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. *BOE* nº 139, de 10 de junio de 2000.

■ REAL DECRETO 1119/2000, de 16 de junio, por el que se incrementa la plantilla del ministerio fiscal. *BOE* nº 173, de 20 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO 1278/2000, de 30 de junio, por el que se adaptan determinadas disposiciones de Seguridad Social para su



aplicación a las sociedades cooperativas. *BOE* nº 173, de 20 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO 1329/2000, de 7 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 991/2000, de 2 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. *BOE* nº 163, de 8 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO 1330/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda. *BOE* nº 163, de 8 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO 1331/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. *BOE* nº 163, de 8 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO 1368/2000, de 19 de julio, de desarrollo de las prestaciones económicas de pago único por nacimiento de tercer o sucesivos hijos y por parto múltiple. *BOE* nº 181, de 29 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO 1370/2000, de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, sobre comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas y de adquisiciones por éstas de acciones propias. *BOE* nº 177, de 25 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO 1371/2000, de 19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía. *BOE* nº 173, de 20 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO 1372/2000, de 19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas. *BOE* nº 173, de 20 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO 1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de Política Exterior. *BOE* nº 175, de 22 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO 1415/2000, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente. *BOE* nº 175, de 22 de julio de 2000.

■ REAL DECRETO 1444/2000, de 31 de julio, por el que se modifica la Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o especiales, aprobada por Real Decreto 2685/1976, de 16 de octubre. *BOE* nº 183, de 1 de agosto de 2000.

■ REAL DECRETO 1473/2000, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores. *BOE* nº 187, de 5 de agosto.

■ REAL DECRETO 1474/2000, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia. *BOE* nº 187, de 5 de agosto de 2000.

■ REAL DECRETO 1475/2000, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento. *BOE* nº 208, de 30 de agosto de 2000.

## 2.6. Ordenes ministeriales

■ CORRECCIÓN de errores de la Orden de 29 de marzo de 2000 sobre establecimiento, reorganización y funciones de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social. *BOE* nº 112, de 10 de mayo de 2000.

■ ORDEN de 26 de abril de 2000 por la que se modifica la Orden de 30 de diciembre de 1997 por la que se regulan las retribuciones complementarias por servicios de guardia de las carreras Judicial y Fiscal, y la Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se establece la cuantía del complemento de destino de servicios de guardia de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. *BOE* nº 107, de 4 de mayo de 2000.

■ ORDEN de 8 de mayo de 2000 por la que se modifica la de 30 de abril de 1999, relativa a los modelos de presentación de las cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil correspondiente. *BOE* nº 135, de 6 de junio de 2000.

■ ORDEN de 12 de mayo de 2000 por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. *BOE* nº 118, de 17 de mayo de 2000. CORRECCIÓN de errores de la Orden de 12 de mayo de 2000 por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. *BOE* nº 123, de 23 de mayo de 2000.

■ ORDEN de 1 de junio de 2000 por la que se dictan las normas para la elaboración de los anteproyectos de Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2001. *BOE* nº 134, de 5 de junio de 2000. CORRECCIÓN de errores de la Orden de 1 de junio de 2000 por la que se dictan normas para la elaboración de los anteproyectos de presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2001. *BOE* nº 162, de 7 de julio de 2000.

■ ORDEN de 28 de junio de 2000 por la que se regula la obtención y rendición de cuentas a través de soporte informático para los organismos públicos a los que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado. *BOE* nº 168, de 14 de julio de 2000. CORRECCIÓN de errores de la Orden de 28 de junio de 2000 por la que se regula la obtención y rendición de cuentas a través de soporte informático para los organismos públicos a los que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado. *BOE* nº 183, de 1 de agosto de 2000.

■ CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de julio de 2000 por la que se determinan los módulos de valoración a efectos de lo establecido en el apartado tercero del artículo 71 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (*Boletín Oficial del Estado* número 172, de 19 de julio). *BOE* nº 192, de 11 de agosto de 2000.

■ ORDEN de 10 de julio de 2000 por la que se regula la composición y funciones de la Comisión de Coordinación prevista en el Real Decreto 1163/1999, de 2 de julio, de integración de los servicios periféricos del organismo autónomo Parque Móvil del Estado en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. *BOE* nº 167, de 13 de julio de 2000.

■ ORDEN de 31 de julio 2000 sobre directrices básicas para la aplicación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, y modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana de Melilla para adaptación de normas. *BOE* nº 196, de 16 de agosto de 2000.

## 2.7. Resoluciones

■ RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2000, del Instituto Nacional de Empleo, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas por dicho Instituto desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 1999. *BOE* nº 112, de 10 de mayo de 2000.

■ RESOLUCIÓN de 6 abril de 2000, de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones Locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda, estableciéndose el modelo que, a estos efectos, se deberá utilizar. *BOE* nº 135, de 6 de junio de 2000.

■ RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre expedición por medios telemáticos

de certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias u otras circunstancias de carácter tributario. *BOE* nº 120, de 19 de mayo de 2000.

■ **RESOLUCIÓN** de 9 de mayo de 2000, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción. *BOE* nº 141, de 13 de junio de 2000.

■ **CORRECCIÓN** de errores de la Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se modifica parcialmente la de 1 de diciembre de 1995 por la que se determina el ámbito territorial de las Unidades de Recaudación Ejecutiva en las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social. *BOE* nº 147, de 20 de junio de 2000.

## **2.8. Circulares**

■ **CIRCULAR** 3/2000, de 31 de mayo, sobre adaptación de las normas generales de funcionamiento del Servicio de Liquidación del Banco de España y de la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública en anotaciones a la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores. *BOE* nº 140, de 12 de junio de 2000.

■ **CIRCULAR** 4/2000, de 2 de agosto, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se establecen los modelos de las comunicaciones de derechos de opción y sistemas retributivos de administradores y directivos en sociedades cotizadas. *BOE* nº 195, de 15 de agosto de 2000.

## **3. JURISPRUDENCIA**

### **3.1. Tribunal Constitucional**

■ **SENTENCIA** 106/2000, de 4 de mayo de 2000. Pleno. Cuestiones de inconstitucionalidad 3.794/1997, 528/1998, 3.808/1998, 4.795/1999, 1.819/1998, 2.389/1998, 2.445/1998, 2.804/1998 y 3.058/1998 (acumuladas). Planteadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias, de Castilla y León y de Galicia respecto de diversos artículos de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, que regulan los precios públicos por la utilización o aprovechamiento del dominio público. Principio de reserva de Ley tributaria: STC 233/1999. *BOE* nº 136, de 7 de junio de 2000.

### 3.2. Tribunal Supremo

■ SENTENCIA de 11 de marzo de 2000, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cuyo fallo ha sido objeto de aclaración en virtud de Auto de 16 de mayo siguiente, por la que se anula en parte el artículo 53 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero. *BOE* nº 188, de 7 de agosto.

■ SENTENCIA de 18 de marzo de 2000, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan en parte los artículos 53 y 93 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero. *BOE* nº 188, de 7 de agosto de 2000.

■ SENTENCIA de 28 de abril de 2000, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el párrafo segundo del artículo 65.2.c) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en la nueva redacción dada por la disposición adicional única del Real Decreto 489/1998, de 27 de marzo. *BOE* nº 188, de 7 de agosto de 2000.

### 3.3. Tribunal de Cuentas. Sala de Justicia

#### 3.3.1. Sentencias y resúmenes doctrinales.

■ SENTENCIA nº 6, de 30 de junio de 2000. Recurso nº 14/1998. Apelación. Juicio de Cuentas nº 10/1995. Ramo de Comunidades Autónomas, provincia de Murcia. Ponente Excmo. Sr. D. Antonio del Cacho Frago.

Planteado incidente de nulidad de actuaciones, resulta procedente abordar con carácter previo, por ser cuestión de orden público procesal, la alegada nulidad de lo actuado, pues su eventual acogimiento llevaría a la Sala a no entrar, por el momento, en el fondo de las restantes cuestiones planteadas. Conforme constante jurisprudencia constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a acceder al proceso a fin de poder ser oído y ejercer la defensa de los intereses en conflicto, lo que impone a los órganos jurisdiccionales una especial diligencia en la realización de los actos de comunicación procesal, y en especial el primero de ellos, a través del cual se pone en conocimiento de las partes la existencia misma del proceso, debido a la trascendencia que objetivamente tienen estos actos para garantizar el principio de contradicción a fin de evitar situaciones de indefensión. Por tanto, es exigible el emplazamiento

personal cuando los legitimados fueran conocidos o identificables a partir de los datos que figuran en el expediente o en las actuaciones practicadas, ya que en tal caso la ausencia de emplazamiento personal y directo implicaría una vulneración del artículo 24 de la Constitución y, como tal, supondría una lesión constitucional generadora de indefensión. La mera infracción de normas procesales no determina *per se* la nulidad del acto procesal de que se trate, siendo necesario que se produzca real y efectiva indefensión, si bien el emplazamiento personal es algo más que un simple requisito formal, en cuanto permite a las partes el ejercicio de su derecho de defensa, de tal manera que su ausencia o defectuosa realización conlleva un vicio de nulidad con los efectos establecidos en la Ley. El emplazamiento en debida forma no es mero formalismo, sino que supone realmente una garantía constitucional, es un requisito fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la efectividad de la tutela judicial.

VOTO PARTICULAR. Consejero de Cuentas Excmo. Sr. D. Paulino Martín Martín.

La comparecencia del demandado en los Autos de primera instancia en momento anterior a dictar sentencia determinó que se le tuviera por parte desde entonces sin retrotraer los trámites procedimentales a momento anterior y, posteriormente interpuso recurso de apelación en el que intervino en todos los trámites, alegando lo que estimó conveniente y solicitando prueba que, previa admisión, quedó incorporada a los Autos. Por ello, los posibles vicios que, como mera hipótesis, hubieran podido tener lugar en el procedimiento de primera instancia han resultado subsanados al haberse respetado los principios de audiencia y contradicción.

■ SENTENCIA nº 7, de 30 de junio de 2000. Recurso nº 37/1999. Apelación. Procedimiento de reintegro por alcance nº 170/98. Ramo de Correos, provincia de Sevilla. Ponente: Excmo. Sr. D. Paulino Martín Martín.

Para que exista responsabilidad contable han de concurrir todos los elementos que establecen los artículos 38.1 de la Ley Orgánica 2/82 en relación con el artículo 49.1 de la Ley 7/88, que en síntesis son: *a)* Daño o perjuicio en los caudales públicos producido por quien tenga a su cargo el manejo, custodia o administración de los mismos. *b)* Infracción dolosa o con culpa o negligencia grave de las normas reguladoras del régimen presupuestario o de contabilidad; y *c)* Relación de causa a efecto entre la acción u omisión y el daño producido. La responsabilidad contable está siempre vinculada al manejo de caudales públicos en cuanto surge de las cuentas que, en sentido amplio, deben rendir quienes los manejan o administran.

Es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas la cuantificación de los daños y perjuicios causados en los fondos públicos al efecto de determinar la responsabilidad contable en que hayan podido incurrir quienes tienen a su cargo el manejo de los mismos, siendo prevalente sobre la jurisdicción penal en cuanto a la fijación de la responsabilidad civil derivada del delito, debiendo respetar la declaración de hechos probados y de autoría de la jurisdicción penal.

El alcance contable no implica necesariamente que la causa del mismo haya sido la malversación de fondos públicos, de ahí que ambas responsabilidades sean independientes. El hecho de que la sentencia penal no haya cuantificado la cuantía de lo defraudado no implica en absoluto que el alcance y su cuantía, determinada en la sentencia de instancia, no haya quedado probado al afecto de imputar responsabilidad contable, de naturaleza civil, reparadora de los daños causados en los fondos públicos y consistente en el reintegro de una cantidad debida como resultado de la obligación del gestor de los fondos públicos de responder de los mismos, responsabilidad distinta e independiente de la responsabilidad penal en que hubiera incurrido por malversación. Para que pueda imputarse responsabilidad contable por alcance es necesaria la existencia de una cuenta que arroje un saldo deudor injustificado, siendo indiferente que el descubierta obedezca a la pura y simple ausencia material de numerario o a la falta de acreditación de la justificación del resultado negativo observado. El alcance no se produce solamente cuando falta el dinero público por la apropiación de la persona que lo tenía a su cargo o de otras, sino también cuando el que maneja los caudales públicos es incapaz de explicar con la mínima actividad probatoria la inversión o empleo dado a los mismos.

■ SENTENCIA nº 8, de 3 de julio de 2000. Recurso nº 8/2000. Apelación. Acción pública nº 4/1995. Ramo de Haciendas Locales, provincia de La Coruña. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Cacho Frago.

Para que una determinada acción pueda ser constitutiva de responsabilidad contable debe reunir los siguientes requisitos: *a)* Que se trate de una acción u omisión atribuible a una persona que tenga a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. *b)* Que dicha acción u omisión se desprenda de las cuentas que deban rendir quienes recauden, administren, intervengan, custodien, manejen o utilicen caudales o efectos públicos. *c)* Que la mencionada acción suponga una vulneración de la normativa presupuestaria o contable del sector público. *d)* Que concurra dolo, culpa o negligencia. *e)* Que el menoscabo sea efectivo y evaluable económicamente; y *f)* Que exista una re-



lación de causalidad entra la acción u omisión y el daño efectivamente producido. La responsabilidad contable como tipo específico y autónomo de responsabilidad tiene unos cauces procesales de exigibilidad distintos de otras jurisdicciones, como la penal y la contencioso-administrativa, con las que resulta plenamente compatible, en virtud de la autonomía jurisdiccional del proceso contable, si bien con unos tipos propios y con unos instrumentos adjetivos específicos, de estructura finalista diferente y con unos criterios de enjuiciamiento orientados a determinar si se han producido perjuicios en la gestión económico-financiero del sector público.

El juez natural para fijar la indemnización que, en su caso, deba satisfacerse al patrimonio público por el presunto menoscabo originado en el mismo es el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función de enjuiciamiento contable, de igual forma que el juez natural para determinar si ese menoscabo es constitutivo de delito es el órgano correspondiente de la jurisdicción penal, y por su parte, el juez natural para decidir si dicho menoscabo se ha producido por la adopción de un acuerdo o resolución basado en un ilícito administrativo es el órgano que corresponda de la jurisdicción contencioso-administrativa. La jurisdicción contable no sólo es compatible con la penal, sino que tiene preferencia sobre ésta para determinar la responsabilidad civil derivada de la comisión de ilícitos penales.

El ejercicio de la acción pública en el ámbito contable es un derecho de contenido procesal, pero de carácter absoluto o incondicionado, sino, por el contrario, limitado y sujeto a determinados requisitos jurídicos formales que afectan tanto a la necesaria individualización de los supuestos de responsabilidad contable como a la precisa referencia a las cuentas y actuaciones susceptibles de determinarla y a la concreta invocación de la normativa legal que se estima conculcada. De conformidad con el criterio mantenido por el Tribunal Supremo, no cabe admitir la acción popular con base en el mero interés en la legalidad y en el simple interés frente a supuestos agravios potenciales o futuros.

La imposición de costas no entraña un recurso disuasorio que pueda considerarse incompatible con la tutela judicial efectiva, y debe aplicarse con base a lo establecido legalmente en cada caso. La imposición de costas viene establecida en la Ley como consecuencia económica que debe soportar bien la parte que ejercita acciones judiciales que resultan desestimadas, bien aquella que las interpone sin fundamento mínimamente razonable o con quebranto del principio de buena fe.



■ SENTENCIA nº 9, de 3 de julio de 2000. Recurso nº 12/2000. Apelación. Procedimiento de reintegro por alcance nº 153/1998. Ramo de Correos, provincia de Madrid. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Cacho Frago.

Para que una determinada acción pueda ser constitutiva de responsabilidad contable tiene que reunir los siguientes requisitos: *a)* Que se trate de una acción u omisión atribuible a una persona que tanga a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. *b)* Que dicha acción u omisión se desprenda de las cuentas que deban rendir quienes recauden, administren, intervengan, custodien, manejen o utilicen caudales o efectos públicos. *c)* Que la mencionada acción suponga una vulneración de la normativa presupuestaria o contable del sector público. *d)* Que concurra dolo, culpa o negligencia. *e)* Que el menoscabo sea efectivo y evaluable económicamente; y *f)* Que exista una relación de causalidad entra la acción u omisión y el daño efectivamente producido.

El saldo deudor injustificado producido por quien tenía a su cargo el manejo de los caudales o efectos públicos es constitutivo de alcance, con independencia de que la conducta observada pueda calificarse de malversatoria, pues, a efectos de delimitar el alcance como ilícito contable que es, basta con que tenga lugar la falta de justificación de una partida en las cuentas que deban rendirse.

Por razón de la distinta naturaleza de la responsabilidad contable y disciplinaria es legalmente posible y lógicamente aceptable el enjuiciamiento de unos mismos hechos por las jurisdicciones contencioso-administrativa y contable cada una dentro de su propio ámbito.

■ SENTENCIA nº 10, de 3 de julio de 2000. Recurso nº 13/2000. Apelación. Procedimiento de reintegro por alcance nº 37/98. Ramo de Correos, provincia de Murcia. Ponente: Excmo. Sr. D. Miguel C. Álvarez Bonald.

El litisconsorcio pasivo necesario viene impuesto por vinculaciones subjetivas, de carácter imprescindible, que resultan del objeto de Derecho material deducido en juicio.

No se despliega la debida diligencia cuando no se adoptan las medidas correspondientes para evitar el resultado dañoso, previo un juicio de previsibilidad del mismo. Es gravemente negligente quien no prevé debiendo hacerlo, lo que le lleva a no evitar, o previendo no ha tomado las medidas necesarias y adecuadas para evitar el evento.

El apoderamiento por el gestor de fondos públicos de alguna cantidad a su cargo es irrelevante a los efectos de poder imputarle responsabilidad contable por alcance, en cuanto el descubierto injustifi-

cado puede obedecer bien a la pura y simple ausencia de numerario, o bien a la falta de soportes documentales o de otro tipo que avalen o acrediten suficientemente la injustificación del resultado negativo observado. El alcance no se produce solamente cuando falta el dinero público por la apropiación de la persona que lo tenía a su cargo, sino también cuando el que maneja caudales públicos es incapaz de explicar con la mínima e imprescindible actividad probatoria la inversión, empleo o destino dado a los mismos y, consiguientemente, no puede justificar el saldo deudor en las cantidades que tenía a su cargo.

Cuando un gestor de fondos públicos se hace cargo de sus nuevas funciones, la diligencia exigible le obliga a realizar las revisiones necesarias para conocer el estado de los bienes y derechos a cuyo manejo accede, debiendo plantear cuantas objeciones estime oportunas. Iniciar su actividad gestora sin un adecuado conocimiento de la identidad e integridad del patrimonio cedido a su confianza constituye una forma de gestión gravemente negligente, sin que dicha calificación pueda combatirse alegando que las operaciones que influyeron en los fondos públicos cuya gestión se confía fueron anteriores a la fecha de iniciación de las nuevas funciones encomendadas. El gestor está jurídicamente vinculado a responsabilizarse del correcto estado de los fondos que recibe o, en su caso, a manifestar las irregularidades que haya observado respecto a ellos.

La firma de las personas que en virtud de su cargo deben participar en cada operación realizada sobre bienes o derechos de titularidad pública tiene una innegable relevancia a los efectos de garantizar el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público al principio de legalidad. La firma del cajero en las actas garantiza el cumplimiento de la legalidad en tanto que demuestra que intervino en el listado un gestor público que entre sus funciones tienen encomendada la de participar en dicha relación y, además, prueba la conformidad del mencionado gestor con el contenido del documento al haberlo aceptado con su firma sin plantear objeción alguna.

■ SENTENCIA nº 11, de 3 de julio de 2000. Recurso nº 10/2000. Apelación. Procedimiento de reintegro por alcance nº A-28/1997. Ramo de Administración del Estado. Ministerio de Cultura, provincia de Madrid. Ponente: Excmo. Sr. D. Paulino Martín Martín.

El derecho a los recursos no es un derecho absoluto o incondicionado, sino que sólo alcanza a la formulación de los ordinarios o extraordinarios concedidos o establecidos en las leyes. Tan es así que al

legislador ha de reconocérsele libertad para ordenar el proceso y el sistema de recursos como estime conveniente, siendo, incluso, en abstracto, posible su inexistencia, ya que los recursos, salvo en materia penal, no responden a exigencia constitucional alguna, sino que, a diferencia del acceso al proceso, son creación del legislador, que, en consecuencia, es libre para su configuración, tanto para determinar los casos en que considere conveniente establecerlos como en lo relativo a los plazos y demás requisitos procesales para su interposición. Conforme a lo establecido en la Ley contable, el único recurso procedente contra las providencias y Autos de los órganos de la jurisdicción contable es el de súplica, contra cuya desestimación no cabe impugnación alguna a la luz del artículo 92.2 de la antigua LJCA y del artículo 79 de la nueva Ley de 1998.

En el ámbito de la responsabilidad contable, las partes no pueden pactar el sometimiento a un orden jurisdiccional distinto, sólo cabe sumisión expresa o tácita a un fuero territorial, pero nunca a una jurisdicción u otra o a una competencia objetiva o funcional. La jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena.

El gestor de fondos públicos en materia de subvenciones es quien las percibe y, en consecuencia, está obligado a realizar la actividad o adoptar el comportamiento que motivó su otorgamiento y a acreditar ante la entidad concedente la realización de esa actividad o la adopción del comportamiento. Procede el reintegro de las cantidades percibidas y del interés de demora cuando se incumpla la obligación de justificar o la finalidad para la que la subvención fue otorgada. Las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, y no se entiende pagada una deuda sino cuando completamente se hubiera entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía. Sólo en el caso de que se hiciere el ofrecimiento de pago y el acreedor se negare sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad. No basta con apuntar que una subvención no está debidamente justificada, cuando se trata, más que de una ausencia de justificación, de una justificación indebida, ya que se debe probar que se ha incumplido la finalidad de la subvención, es necesario acreditar que la cantidad subvencionada se destinó a financiar actividades distintas de las previstas.

■ SENTENCIA nº 12, de 19 de julio de 2000. Recurso nº 40/1999. Apelación. Procedimiento de reintegro nº 192/98. Ramo de Correos, provincia de Tenerife. Ponente: Excmo. Sr. D. Miguel C. Álvarez Bonald.

Para que un alcance en los fondos públicos pueda dar lugar a la exigencia de responsabilidad contable deben concurrir además una

serie de requisitos, como son: *a)* Que se trate de una acción u omisión atribuible a una persona que tenga a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. *b)* Que dicha acción u omisión se desprenda de las cuentas que deban rendir quienes recauden, administren, intervengan, custodien, manejen o utilicen caudales o efectos públicos. *c)* Que la mencionada acción suponga una vulneración de la normativa presupuestaria o contable del sector público. *d)* Que concorra dolo, culpa o negligencia. *e)* Que el menoscabo sea efectivo y evaluable económicamente; y *f)* Que exista una relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño efectivamente producido.

Para determinar los efectos que, para la exigencia de responsabilidad contable, produce la sustracción de caudales públicos por terceros ajenos al normal manejo de los mismos no puede aplicarse un mismo criterio general a todos los casos, pues las circunstancias específicas de cada uno exigen un tratamiento individualizado. En algunos supuestos la Sala de Justicia ha mantenido que la sustracción de fondos públicos por personas no relacionadas con los mismos constituye un supuesto de fuerza mayor que interrumpe el nexo de causalidad, si bien, en otros casos, las específicas circunstancias concurrentes han motivado que la Sala haya sostenido que entre la conducta negligente del demandado y el resultado lesivo en el patrimonio público existe el nexo de causalidad en los casos de sustracción por terceras personas, ya que la actividad profesional enjuiciada en tales casos, dado su carácter gravemente negligente, se erigiría en causa suficiente del menoscabo. En todo caso hay nexo de causalidad cuando el irregular cumplimiento de sus funciones por el demandado desencadena una situación fáctica adecuada para que el menoscabo se produzca. Basta que la conducta del demandado sea «causa suficiente» para se le pueda exigir responsabilidad contable. La jurisprudencia contable ha interpretado el requisito legal de la causalidad en un sentido amplio que va más allá de los rígidos conceptos de «causa directa» y «causa inmediata».